

Peso y pesadumbre
GUILLERMO KNOCHENHAUER

Dónde estaba la solidez de la economía mexicana de la que tanto se (J presumió durante el sexenio de Carlos Salinas?, se preguntó todo mundo al amanecer del 21 de diciembre; dónde está esa solidez, si alguna vez existió, es la pregunta que subsiste, pasado el impacto de la devaluación.

Los factores económicos que causaron la crisis son claros y aún así, no explican, por completo, el tamaño de la depreciación sufrido por el peso mexicano y los riesgos de insolvencia financiera en que nuevamente, como en el 82, se encuentra la economía ante sus obligaciones externas.

Es evidente que a los problemas relativos ala generación de valor que padece la economía abierta mexicana se suma, y es posible que de manera preeminente, una pérdida de confianza en el futuro económico de México, tema que da lugar a la segunda cuestión ordenadora de las siguientes líneas: ¿qué es, cómo y dónde se vio afectada esa confianza?.

La crisis de generación de valor en la economía

La explicación de lo ocurrido al peso mexicano es sencilla y fácil de entender: en resumen, el peso estaba sobrevaluado, lo que quiere decir que se podían producir y, en consecuencia, adquirir más bienes y servicios con dólares que con nuestra moneda.

Las inversiones y el déficit comercial externo —formas que asume el ahorro externo captado— pueden ser, como lo sostenía el expresidente Carlos Salinas y el gobernador Mancera del Banco de México, factores de estímulo al crecimiento económico, pero ello a condición de que la composición de las importaciones en bienes de producción sea una que complemente los proyectos de inversión productiva que se realicen para responder a la demanda de un mercado en expansión.

Ninguna de esas condiciones se reunieron en el caso mexicano; el ahorro externo atraído lo compusieron, por un lado, inversiones que durante 1993-94 se concentraron en 73.3% en valores en cartera y por otro lado, importaciones de bienes de consumo, intermedios y de producción que en vez de complementar la oferta interna, tendieron a sustituirla para surtir la demanda de un mercado que, conforme a las previsiones del modelo económico seguido, tenía su mayor dinamismo en unos cuantos renglones de exportación.

Si la oferta de bienes importados es más barata que la producida internamente, se debe no solamente a problemas de rezago tecnológico o ineficiencia de la planta productiva, que los hay, sino también a que las empresas en México tienen que operar en el entorno de lo que se ha llamado el "costo país", que resulta mucho más elevado que el de sus competidores foráneos.

Transportes, comunicaciones, materias primas y otros insumos y servicios, son más caros para la empresa que paga y vende en pesos en México, que para aquellas de origen extranjero que también concurren al mercado interno.

Por ejemplo, es más barato transportar granos desde cualquier puerto estadounidense a uno mexicano y de ahí trasladarlo a la ciudad de México, que poner en el DF la producción de Tamaulipas.

En el orden de los costos destacan, con mucho, los elevados cargos de intermediación que cobra la banca mexicana por sus servicios financieros, los cuales son tres veces mayores al cobro que hacen, por los mismos servicios, los bancos en Estados Unidos (esos cargos son adicionales a las elevadas tasas de interés que debe ofrecer el mercado financiero para poder atraer a los ahorradores extranjeros).

Otros costos también son mucho mayores que en EU para quien quiera invertir productivamente en México los pesos que aquí haya obtenido; el servicio telefónico es un ejemplo. Teléfonos de México opera aproximadamente ochenta líneas por cada mil habitantes, lo que le redituó ganancias cercanas a 2,900 millones de dólares en 1993; las empresas más grandes de Estados Unidos hacen funcionar 600 líneas por cada mil habitantes, con lo cual ganaron 900 millones de dólares aquel año.

Se pueden ver en los ejemplos referidos, problemas de deficiente infraestructura del país, pero también de estafas a la economía que inhiben las inversiones, el ritmo de crecimiento de la producción y del empleo, las cuales fueron permitidas sin cortapisas por el gobierno anterior. Aparte de que ahí pudiera haber casos de corrupción, el modelo teórico seguido considera necesaria la creación de grandes consorcios que sean capaces de "representar al país" en la economía globalizada. Para ello haría falta una estrategia integradora que convirtiera a las pequeñas y medianas empresas en proveedoras de las vinculadas al mercado exterior.

Con las fronteras abiertas a las importaciones y una oferta interna costosa y cada vez más desarticulada, las compras al exterior crecieron con mayor rapidez que la producción nacional. Ese binomio pone en evidencia, desde 1993, que había un problema estructural con el valor de la moneda mexicana el cual, como el de cualquier otra es, antes que ninguna otra, la expresión del valor de la producción de una nación.

Desde el punto de vista macroeconómico, que es como lo vio el gobierno de Salinas, no habría problema mientras siguieran entrando al país cantidades de dólares mayores al monto del déficit comercial. Implícito en esa expectativa está la "subestimación" del crecimiento interno —menosprecio que se reflejó en la omisión del diseño y aplicación de políticas de fomento industrial y agropecuario y una estrategia integradora. También se acepta que el ahorro externo sea el soporte del modelo de transformación económica interna.

Para asegurar la captación de divisas, debían cumplirse dos condiciones: la de ofrecer rendimientos muy elevados en comparación a otros mercados, y ese intangible llamado confianza, que los ahorradores debían depositar en el modelo de reformas económicas y en

la estabilidad del país. Desde 1993, empero, se pudieron apreciar signos inequívocos de que llegaría el momento en que sería insostenible que la economía en lento crecimiento pudiera seguir pagando altos rendimientos al ahorro externo.

En consecuencia, se intentó reducir las tasas internas de interés, pero el correctivo contradecía la condición de dependencia del modelo; en febrero de 1994, a pesar de la incertidumbre causada por los conflictos en Chiapas y por Manuel Camacho, los Cetes a 28 días registraron un rendimiento de 8.8%, la tasa más baja desde su creación, hace casi dos décadas. Con ello, continuaban su descenso iniciado a principios de 1993.

Simultáneamente, en Estados Unidos se aumentaban los réditos para contener la expansión de su economía; la diferencia de tasas de interés entre México y EU se redujo, de 11% promedio durante 1993 a 5 % en febrero de 1994, al tiempo que la diferencia con relación a otros países latinoamericanos y europeos se ampliaba.

A la comunidad financiera internacional dejó de parecerle atractivo adquirir valores gubernamentales mexicanos a esos rendimientos.

La decisión era favorecer el descenso de las tasas de interés y dejar que el menor flujo de inversión financiera externa se reflejara en un mayor precio del dólar. Así, el tipo de cambio interbancario aumentó 5.7% en promedio durante marzo, después de 20 meses que permaneció prácticamente inalterado.

El homicidio de Luis Donaldo Colosio afectó el plan del gobierno al provocar una fuga de capitales mayor a la estimada por efecto del ajuste de las tasas; éstas tuvieron que volver a elevarse: la de los Cetes a plazo de 28 días aumentaron más de nueve puntos porcentuales en sólo seis semanas, para situarse el 19 de abril en 18% con lo cual regresaron a los niveles de noviembre de 1992.

De manera forzada, la tasa de interés debía recobrar su papel como válvula reguladora de las entradas y salidas de capital del país y volver a operar como factor inhibitorio del crecimiento productivo de la economía.

A pesar del repunte de los réditos, los capitales ya habían decidido emprender su salida de México. La inversión extranjera, que en 1993 ascendió a 33 mil 331 millones de dólares y en el primer trimestre de 1994 a 9 mil 634, se desplomó en 80% para el segundo trimestre, cuando sólo se captaron 2 mil 776 millones de dólares.

En sentido contrario a la caída libre del superávit de la cuenta de capital, el comportamiento del déficit de la cuenta corriente no se alteró y siguió el curso ascendente que adoptó desde 1992, cuando se alcanzó un déficit comercial por 22,009 millones de dólares, 40% más que en 1991 y tres veces mayor al de 1990; el de 1994 se estima superior a los 28 mil millones de dólares, a pesar de que el aumento de la riqueza producida ha sido inferior al de la población desde 1992; la relación entre crecimiento del PIB y el poblacional solamente ha sido positivo en 1989, 1991 durante los últimos doce años.

¿Podía, con esos datos, por todos conocidos, presumirse de solidez de la economía mexicana? O debemos, más bien, reconocer la extrema vulnerabilidad que la dependencia del ahorro externo, captado a elevadísimos costos financieros, significa para todo un modelo de crecimiento al que le bastó el descontrol monetario para que estallaran nuevamente los problemas que la administración pasada se propuso resolver prioritariamente: la deuda externa (que crece en proporción idéntica a la devaluación), el ordenamiento de las finanzas públicas (afectadas, precisamente, por sus crecidas obligaciones de pago externas) y el control de la inflación.

La crisis de confianza

Es interesante revisar la prensa estadounidense en torno a la reunión cumbre de presidentes y jefes de Estado de América que tuvo lugar en Miami durante los primeros días de diciembre pasado. El evento fue ocasión para que se analizaran los efectos en Latinoamérica del modelo del que México fue ejemplo a seguir y en virtud del cual se ha dado, con sorprendente grado de estandarización en la región:

- La redefinición de los ámbitos de competencia del Estado.
- La introducción de la ideología de mercado en las relaciones económicas.
- La apertura comercial y a la inversión extranjera.
- La forzada recomposición de los sistemas político y social para hacerlos compatibles con las nuevas coordenadas productivas.
- La redefinición de las metas del desarrollo.

Esas medidas han hecho de América Latina la región del planeta con mayor desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza, en el marco de un crecimiento muy mediocre por comparación al de otras regiones; ello sugiere a los ojos estadounidenses y europeos la existencia de factores de inestabilidad política y social que los hace colocarse a la expectativa de ver las capacidades de los gobernantes y empresarios latinoamericanos para modificar o manejar la situación.

Es el modelo mismo, así, en general, el que ha dado lugar a la desconfianza en la viabilidad económica y la estabilidad social en los "mercados emergentes" de la región. El colapso de la paridad del peso no sólo ha afectado al flujo de inversiones a México, sino hacia los mercados más fuertes del continente.

Después del modelo, la confianza se fija o se aleja de las élites a cargo de su conducción; al respecto hay que reconocer que la mexicana no ha mostrado un manejo hábil, firme y certero de la situación y que inclusive es sospechosa de que algunos de sus hombres de negocios fueron los que iniciaron la fuga de capitales. Más de 9 mil millones de dólares habían salido del país durante las semanas previas al cambio de gobierno, flujo que continuó hasta que se agotó el apoyo de las reservas del Banco de México, el 20 de diciembre. También ha sido señalado que los inversionistas extranjeros no se sintieron seguros con el gabinete que formó el presidente Ernesto Zedillo y que no percibieron ningún mensaje alentador en el discurso inaugural del nuevo jefe del poder ejecutivo.

Estaban atentos a su desempeño, cuando sobrevienen los titubeos y falta de información de quien fuera secretario de Hacienda, Jaime Serra.

El "serrapuchazo" significó la súbita pérdida de la reputación que tanto le había costado ganar al gobierno mexicano en los círculos financieros internacionales y cuya recuperación tomará mucho tiempo y exigirá nuevas concesiones, como la que ya se ofreció de permitir el 100% de capital foráneo en los bancos y anticipar la apertura a las empresas de telecomunicaciones.

No menos importante que los errores de Serra en la afectación de la confianza, hay que considerarla situación en Chiapas y las actitudes de todas las partes. Por un lado están los comunicados de intransigencia del EZLN pero, por el otro, es obvio que no hubo, en el equipo del presidente Zedillo, quien advirtiera que la abierta movilización de tropas del ejército mexicano hacia Chiapas se vería, a través de las fotos de prensa, aquí, y sobre todo en el extranjero, como el momento preliminar al estallido de una guerra que a pesar de las tensiones, no parecía tal desde que el gobierno declaró el cese unilateral del fuego el 10 de enero pasado.

La prioridad inmediata es el crecimiento económico y la democracia

A diferencia de otras crisis económicas, ésta ocurre en medio de tensiones políticas exacerbadas. Los cambios introducidos en las bases y enfoque del desarrollo nacional a partir de la crisis monetaria y financiera de 1982, se han profundizado en vez de atenuarse, ante la resistencia de la difícil recomposición de alianzas políticas y sociales que en busca de la aceptación del crecimiento con estabilidad (?) en sustitución del histórico objetivo social, ideológico y político de crecimiento con distribución de la riqueza.

Se reformaron durante el salinato, la Constitución de 1917 y mucho de las relaciones económicas del Estado con los sectores productivos, pero no se quiso avanzar en los cambios necesarios al presidencialismo y al PRI.

Los implantadores del modelo han supuesto que la reforma económica tendría menores dificultades sin el acompañamiento de una reforma política; han creído que la apertura a la participación democrática de la sociedad sería mejor lograda sobre la base del crecimiento de la riqueza y del empleo; sólo que éste se ha empeñado en defraudar las expectativas teóricas e ideológicas de quienes le han apostado todo a la acumulación privada, a la liberalización del comercio y de las inversiones y a la redocumentación de las obligaciones del gobierno y del Estado.

En vez de un crecimiento con estabilidad de precios, financiera y monetaria, México reclama uno que sin perder lo primero, sea con equidad y justicia, y ello sólo es posible si se le cierra el paso a los planteamientos autoritarios para abrir el espacio de la participación democrática, de los contrapesos al poder presidencial, del fortalecimiento del federalismo y del sistema de partidos y de las organizaciones sociales no gubernamentales.

El de 1995 será un año económicamente difícil; con el 1.5% de crecimiento del PIB y los siete u ocho mil millones de dólares que, según el secretario Herminio Blanco, de SECOFI, serán los que logren captarse del exterior, el modelo económico vigente no permitirá que aumente el empleo ni mejore el bienestar familiar; habrá escasez de productos e inflación en perjuicio de todas las clases sociales.

El plan de emergencia sólo debería perdurar hasta marzo o abril; de momento es necesaria la astringencia crediticia y monetaria para evitar el disparo de la inflación, pero en 90 días ya se habrá visto la actitud de los inversionistas extranjeros y sería posible actuar en favor del crecimiento económico, con nuestros propios recursos.

Tres medidas propiciatorias de ello serían la reestructuración de las carteras vencidas que tienen todos los sectores productivos con los bancos, el ajuste salarial a lo que haya perdido su poder adquisitivo para entonces y el manejo de los instrumentos fiscales como redistribuidores de la riqueza.

La situación exige cambios al modelo y la oportunidad para hacerlos radica en la concertación política en torno a un proyecto que rescate, para México, principios, valores y capacidad de decisión en el contexto, innegable, de la recomposición de la economía mundial.

Confianza en el gabinete



